

## DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

### Concepto No. 92911

**Bogotá D.C., miércoles, 31 de agosto de 2011**

**Asunto: Rup y personas extranjeras**

Doctora  
MARTHA GLADYS SANCHEZ  
Martha.sanchez@aerocivil.gov.co  
Técnico Aeronáutico — Procesos Contractuales  
AERONAUTICA CIVIL  
Ciudad

Estimada doctora Sánchez:

De manera atenta por medio de la presente me permito dar respuesta a sus inquietudes relacionadas con la exigibilidad del Registro Único de Proponentes, en adelante RUP, a personas jurídicas extranjeras.

Teniendo en cuenta que respecto de las consultas y peticiones las entidades públicas solamente pueden absolver inquietudes de carácter general y abstracto de su competencia, y que este Departamento no es competente para atender consultas específicas y concretas relacionadas con un caso particular, el DNP no se pronunciará sobre casos particulares.

No obstante lo anterior, haremos una breve exposición de la normatividad que rige la materia desde una perspectiva en abstracto para que adopte las decisiones que considere más conducentes conforme la situación particular y concreta que corresponda.

El Decreto 1464 de 2010, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el RUP a cargo de las Cámaras de Comercio, establece:

...(…)...

Artículo 4°. inscripción. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes.

Para tal efecto los interesados podrán solicitar su inscripción ante cualquier Cámara de Comercio, pero aquella se realizará por la que tenga jurisdicción en su domicilio principal.

Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia se inscribirán ante la Cámara de Comercio donde se encuentre inscrita la sucursal, de conformidad con las reglas especiales señaladas en el presente decreto. Cuando una persona natural tenga más de un domicilio, deberá inscribirse ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el municipio en el cual tenga el asiento principal de sus negocios.

El proponente inscrito en el Registro Único de Proponentes que cambie de domicilio principal y quiera mantener vigente su registro, deberá informar a la Cámara de Comercio competente en su nuevo domicilio de tal cambio, señalando la cámara en la que se encontraba inscrito, a fin de que esta traslade la documentación e información respectiva a la cámara del nuevo domicilio. Recibida esta, la cámara competente hará la inscripción con fundamento en la verificación realizada por la cámara en la que se encontraba inscrito, conservándose la firmeza del registro trasladado.

Las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia deberán aportar declaración que se entiende prestada bajo juramento, en la que indique el municipio donde se encuentra su domicilio. En caso de tener más de un domicilio,

deberá inscribirse ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el municipio en el cual tenga el asiento principal de sus negocios.

La publicación de la inscripción en el registro de proponentes, así como la actualización y renovación, la realizarán las Cámaras de Comercio a través del portal del Registro Único Empresarial "RUE".

Parágrafo. No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos de contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. Sus condiciones serán verificadas por la entidad contratante, de conformidad con lo señalado en el artículo 53 del presente decreto.

Artículo 7°. Abstención de la inscripción, actualización o renovación. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de realizar la inscripción, actualización o renovación en el Registro Único de Proponentes, en los siguientes eventos:

11. Cuando la persona jurídica extranjera no tenga sucursal en Colombia.

12. Cuando la persona natural extranjera no presente una declaración juramentada de que se encuentra domiciliada en Colombia.

Artículo 52. Inscripción Sociedades Extranjeras con sucursal en el país. Cuando se trate de sociedades extranjeras estas se inscribirán en el Registro

Único de Proponentes ante la Cámara de Comercio donde haya establecido el domicilio de su sucursal aportando los documentos mencionados en el presente artículo.

Cuando las personas jurídicas extranjeras no tengan Número de Identificación Tributaria podrán inscribirse con el NIT de su sucursal en Colombia.

La Cámara de Comercio competente para inscribir la persona jurídica extranjera deberá verificar documentalmente los requisitos habilitantes y la calificación mencionados en el artículo 15 del presente decreto en los siguientes términos:

Artículo 53. Requisitos habilitantes de personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país. Las entidades contratantes deberán verificar directa y únicamente la información sobre la capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes para el caso de las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia. En consecuencia, a los citados oferentes no se les podrá exigir el registro único de proponentes, y no se les exigirá ni calculará el costo de contratación.

Para tal efecto, deberán señalar en el respectivo pliego de condiciones las condiciones que se exigen, los parámetros de verificación y los documentos que para tal efecto deberán ser presentados. En ningún caso las exigencias que se le hagan a los proponentes extranjeros a los que se refiere el presente artículo, podrán ser más gravosas que para los proponentes nacionales o extranjeros que deben tener registro único de proponentes, ni se podrán exigir documentos o información que no sea la estrictamente necesaria para verificar las condiciones a que se refiere el inciso 1°.

De la lectura de los artículos citados se puede extraer lo siguiente: 1) La regla general es que todas aquellas personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con el Estado deben estar inscritas en el RUP, 2) Las personas naturales o jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia deben inscribirse en el RUP, 3) Las personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia no deben inscribirse en el RUP, caso en el cual, la llamada a verificar las condiciones jurídicas, financieras, de experiencia y la capacidad de organización es la entidad contratante, quien deberá establecer en el pliego de condiciones los documentos que deben ser presentados, sin hacer exigibles aquellos que no sean necesarios para la verificación las condiciones descritas.

Adicionalmente, es importante que la entidad contratante en los pliegos de condiciones establezca claramente que los documentos otorgados o expedidos en el exterior, deben presentarse debidamente legalizados o apostillados en la forma prevista por las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Así mismo, cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros. En este caso sólo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-412-01<sup>1</sup> se pronunció sobre los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, los cuales han de estar respaldados por el cónsul colombiano o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, en análisis de la demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. Dicho pronunciamiento señaló:

"En efecto, si bien es cierto la referida Convención establece la abolición del trámite de legalización diplomática y consular de aquellos documentos que, expedidos en uno de los Estados contratantes, se presenten en otro de la misma condición, ella sólo es aplicable a aquellos documentos públicos relacionados en el artículo 1 del referido instrumento. Además, hay que anotar que de acuerdo con los principios del Derecho internacional, el referido instrumento internacional sólo obliga a los Estados contratantes del mismo.

Dice así la disposición citada:

## "Artículo 1

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-412 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño

La presente Convención se aplicará a documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante.

Los Siguietes son considerados como documentos públicos a efectos de la presente Convención 2:

a) documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un portero de estrados;

b) documentos administrativos;

c) Actos notariales;

d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título personal, tales como certificados oficiales que consignan el registro de un documento o que existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y notariales de firmas".

No sobra advertir que de acuerdo con lo señalado en el mismo instrumento internacional, la legalización significa "únicamente el trámite mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado certifican la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevaré" 3.

Por manera que sí para dichos documentos no se exige ahora la autenticación por parte de los agentes diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado, mucho menos se requerirá que la firma de aquellos se abone por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Eso sí, ha de recalcarse, que aquellos eventos no contemplados en el transcrito aparte del artículo 1 y expresamente excluidos por la segunda parte del mismo, si requieren la legalización y desde luego allí sí se necesita que el Ministerio abone la firma del cónsul o del agente diplomático. Tales casos -según lo señala la norma en comento-son los siguientes:

"Sin embargo, no se aplicará la presente Convención:

- a) documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares:
- b) a documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales o aduaneras".

(Cursiva fuera de texto)

Se puede concluir entonces, que SOLO los proponentes extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia deben inscribirse en el Registro Único de Proponentes con el procedimiento que para el efecto tiene establecido el artículo 52 del Decreto 1464 de 2010 y para los proponentes extranjeros que no cuenten con domicilio o sucursal en Colombia, las entidades públicas deberán establecer en los pliegos de condiciones los requisitos habilitantes que solicitan, así como la forma como operará la verificación directa sobre los documentos atendiendo las disposiciones que para efectos de su validez son aplicables; Lo anterior, con el deber legal de no exigir documentos que no sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas en condiciones de igualdad.

2 De acuerdo con el artículo 11, la Convención entró en vigor el 24 de enero de 1965, sexagésimo día después del depósito del tercer instrumento de ratificación, respecto de los siguientes Estados, en cuyo nombre se depositaron los instrumentos de ratificación en poder del Gobierno de los Países Bajos en las fechas indicadas:

Yugoslavia..... .25 de septiembre de 1962

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (también aplicable a Jersey, el Bailiaje de Guernesey y la Isla de Man)....21 de agosto de 1964

Francia (también aplicable a los Departamentos y Territorios de

Ultramar ..... 25 de noviembre de 1964

3 Artículo 2 de la Convención sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros.

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, las respuestas dadas por esta entidad a las consultas que se elevan, no comprometen su responsabilidad ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución; por lo tanto, es deber del interesado evaluar las opiniones jurídicas consignadas en los conceptos, sopesarlas a la luz de la normatividad y jurisprudencia, aplicables en la materia, y asumir su propia posición, conforme al grado de análisis y convencimiento adquirido.

Cualquier aclaración con gusto la atenderemos.

## **Proyecto de Contratación Pública**

Programa de Renovación de la Administración Pública



Departamento Nacional de Planeación